

La ciencia para producir mejores políticas públicas



Eloísa del Pino
Presidenta del CSIC

CRECIENTEMENTE, muchos de los Gobiernos de todo el mundo acuden a la comunidad científica en busca de asesoramiento para tratar de dar una respuesta a temas que, como la pobreza o el cambio climático, son preocupaciones sociales, pero también problemas que los investigadores estamos intentando entender. La pandemia de la covid-19 es un ejemplo de esta práctica, ya que hubo una respuesta por parte de los científicos, que no solo demostraron su capacidad para aportar nuevos conocimientos al servicio de la ciudadanía, sino que además fue patente su gran interés y motivación para hacerlo.

Los investigadores e investigadoras del CSIC, de manera individual u organizados colectivamente, participan en varios cientos de comités de asesoramiento gubernamental en todos los niveles de la Administración, también en el ámbito europeo y en todas las áreas de la política pública, como la sanitaria, la social, la agrícola, la pesquera, la alimentaria, la política exterior, de seguridad, la medioambiental, la energética, la cultural, la digital o la misma política científica, entre otras. Gracias a este asesoramiento, los responsables públicos pueden saber a cuánto deben limitarse las cuotas pesqueras, cómo deben gestionar los acuíferos, cuántas vacunas serán necesarias para conseguir la inmunidad de rebaño o qué aspectos deben financiar para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer.

Sin embargo, la relación entre los políticos y los científicos no está exenta de dificultades, las cuales han sido perfectamente descritas por la literatura científica que la analiza. Algunos de los problemas son de tipo práctico. Por ejemplo, los tiempos de la ciencia no siempre coinciden con las necesidades de los decisores políticos; el lenguaje que utilizan «estas dos comunidades», como las denomina el sociólogo argentino Marcos Kaplan, es con frecuencia muy diferente porque existen problemas de entendimiento; desde la esfera político-administrativa se argumenta que la ciencia no siempre es tan contundente o está disponible cuando los decisores la necesitan; o que la oferta científica es demasiado amplia.



Cuando las decisiones no incorporan evidencia, producen efectos negativos, que van desde el despilfarro presupuestario hasta la incapacidad de resolver los problemas públicos

Una dificultad que podríamos calificar como más de fondo es la que tiene que ver con la percepción sobre el alcance de esta relación: ¿hasta dónde debe llegar la política y hasta dónde la ciencia? Se trata de una discusión clásica que ya plantearon pensadores como Max Weber, Isaiah Berlin o Jürgen Habermas.

Algunos sostienen que los científicos deben ser una especie de defensores de las políticas, por tratar de influir directamente en las decisiones que toman los Gobiernos, algo que restringe o sesga la elección política. Otros proponen que los científicos deben limitarse a presentar eficazmente datos para que los políticos amplíen su margen de elección y tomen sus decisiones. De acuerdo con esta postura, las decisiones deben dejarse siempre en manos de los políticos que han sido elegidos democráticamente. Los decisores tienen que tener además en cuenta otros criterios, como la disponibilidad presupuestaria, la viabilidad administrativa o el imperativo electoral, que con frecuencia condicionan sus capacidades.

Esta última reflexión ha llevado a muchos a plantear que lo verdaderamente democrático en la llamada *sociedad del conocimiento* es establecer mecanismos para que la evidencia informe las políticas y para que los decisores públicos tengan que explicar por qué a veces la dejan de lado. Se trata de institucionalizar el asesoramiento científico, de modo que decidamos qué temas necesitan respuestas científicas, cómo tiene que producirse este asesoramiento o qué evidencia se considerará válida. El hecho de que los ciudadanos sean conscientes del valor de la ciencia es esencial para que estas prácticas se consoliden, por ello la cultura científica y la ciencia ciudadana son elementos centrales de estas estrategias.

Como organización científica de carácter multidisciplinar, el CSIC ha puesto en marcha numerosos programas para favorecer el aprovechamiento del conocimiento creado en las instituciones. Ejemplo de ello son las plataformas temáticas interdisciplinarias (PTI), instrumentos de investigación e innovación que abordan retos multidisciplinarios de alto impacto científico, económico y social. Integradas por equipos de distintos centros del CSIC, están abiertas a la participación de empresas, Administración, otras instituciones y agentes sociales.

El CSIC ha lanzado el *hub* Converte para conectar a investigadores con empresas e impulsar la innovación abierta. Este espacio virtual es una iniciativa estratégica impulsada por la Vicepresidencia de Innovación y Transferencia (VIT) del organismo y ha sido concebida para dinamizar la colaboración del CSIC con el ecosistema innovador y generar con ello soluciones a desafíos globales en biotecnología, nuevos materiales, ciencias de la alimentación y variedades vegetales, entre otros.



Con la finalidad de mostrar la ciencia que desarrolla en sus laboratorios para hacerla llegar a los gestores políticos, las empresas, los periodistas y otros agentes sociales, el CSIC ha lanzado el programa Cicerón. Esta iniciativa, que potencia la contribución de la ciencia y la innovación en la resolución de desafíos relacionados con salud, la sociedad digital, los alimentos y la energía, consiste en una serie de jornadas temáticas en las que se invita a políticos, empresarios y periodistas para visitar el CSIC y conocer sus investigaciones en torno a un desafío social.

Esta colección, *Ciencia para las Políticas Públicas*, se une a las iniciativas que en los últimos años se han puesto en marcha en la Unión Europea, por parte del propio Parlamento español y el Ministerio de Ciencia e Innovación para que la relación entre ciencia y política sea fructífera.